

CAPÍTULO 3 LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

197. Diversidad de jurisdicciones. Después de los acontecimientos de 1991 se imponía una reforma de los tribunales. La administración de justicia se encontraba muy desacreditada en la percepción social y se le reprochaba a los juzgadores su total ausencia de independencia ya que con frecuencia estaban sometidos a sus superiores jerárquicos o dependían de personalidades influyentes locales.

Se elaboraron dos proyectos de reforma; el primero con una vertiente reformista, esencialmente defendido por universitarios, y el segundo, de tendencia más moderada, postulado por los propios juzgadores, más concientes de las realidades y dificultades de una reforma, pero el objetivo era el mismo y consistía esencialmente en restituir a los juzgadores su independencia, incrementar el presupuesto de la administración de justicia, cambiar las reglas de procedimiento ya fuera abandonando, o al menos reduciendo, el sistema inquisitorial.

Las reformas discutidas no fueron adoptadas en su totalidad, pero si se adoptaron cambios significativos, cuando menos por lo que se refiere al texto de la ley, que dan una nueva visión de la organización de la justicia en Rusia.¹

Actualmente las reglas relativas a la justicia y a la organización judicial se encuentran insertas en la Constitución de la Federación de Rusia de 1993, específicamente en el capítulo 7 de la Constitución, relativo a “la justicia”, y en la ley Constitucional federal sobre el sistema judicial de la Federación de Rusia, publicada el 31 de diciembre de 1996, y que entró en vigor el 1o. de enero de 1997.

Se ha querido organizar un sistema judicial unitario. Todas las jurisdicciones federales de la Federación de Rusia pueden aplicar la Constitución, las leyes federales, los tratados internacionales, las Constituciones y los estatutos de gobierno de los “sujetos” de la Federación de Rusia. El estatuto orgánico de los jueces es único. El financiamiento de las instituciones judiciales está en principio únicamente asegurado por el presupuesto federal.

Como quedó asentado, la Constitución prevé tres cortes federales: la Corte Constitucional, la Suprema Corte de la Federación de Rusia y la Corte Superior de Arbitraje de la Federación de Rusia.

198. La Corte Constitucional de la Federación de Rusia. La Corte Constitucional actual es la heredera de la Corte creada en 1991 durante el periodo de la Perestroika, cuando se perfilaba un sistema presidencial y una forma de separación de los poderes. Esta Corte Constitucional está regida por la Constitución y la ley federal constitucional del 24 de junio de 1994 relativa a la Corte Constitucional de la Federación de Rusia. La ley del 15 de diciembre de 2001 agregó algunas modificaciones.

A la Corte Constitucional se le conceptua como una jurisdicción que forma parte del Poder Judicial; está compuesta de 19 jueces divididos en dos cámaras. La Corte Constitucional sesiona

¹ P. H. Solomon, La difficile réforme de la justice en Russie, *Revue Esprit*, 244, juillet 1998, p. 112.

en forma plenaria u ordinaria. Los juzgadores son nombrados por el Consejo de la Federación a propuesta del presidente de la Federación por un periodo de 12 años improrrogables. La edad de retiro forzoso es a los 70 años y es la Constitución la que determina quien tiene la legitimidad de recurrir a ella y su competencia.

Estan legitimados para recurrir a la Corte Constitucional el presidente de la Federación de Rusia, la Duma de Estado y una quinta parte de los miembros del Consejo de la Federación, los diputados de la Duma de Estado del Gobierno de la Federación de Rusia, la Suprema Corte de la Federación de Rusia, la Corte Superior de Arbitraje de la Federación de Rusia, o los órganos competentes del Poder Legislativo o Ejecutivo de los “sujetos” de la Federación de Rusia.

Su competencia está diversificada. Su mandato principal consiste en “resolver de conformidad a la Constitución de la Federación de Rusia” sobre la constitucionalidad de numerosos textos emanados de los órganos federales o de los “sujetos” de la Federación, de leyes federales, de actos reglamentarios del presidente de la Federación de Rusia, del Consejo de la Federación, de la Duma de Estado y del Gobierno de la Federación de Rusia, así como de las Constituciones de las repúblicas, de leyes u otros actos reglamentarios de los “sujetos” de la Federación, de acuerdos entre los órganos del poder de Estado de la Federación de Rusia y los órganos del poder de Estado de los “sujetos” de la Federación de Rusia, y de los tratados internacionales. Se recurre a la Corte Constitucional mediante la vía de acción (artículo 125) o de excepción (artículo 125§ 4).

A la Corte Constitucional le compete adicionalmente resolver los conflictos de competencias que pueden surgir entre los órganos federales del poder de Estado o entre los órganos del poder de Estado de la Federación de Rusia y los órganos del poder de Estado de los “sujetos” de la Federación de Rusia. Es también de su competencia, en caso de ser recurrida por parte de un tribunal, pronunciar sentencias respecto a la trasgresión de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos.

A requerimiento de determinados órganos de Estado de la Federación de Rusia o de los órganos del Poder Legislativo de los “sujetos” de la Federación de Rusia, la Corte Constitucional realiza la interpretación de la Constitución.²

Finalmente interviene para dictaminar sobre el respeto del procedimiento seguido en caso de que se acuse al presidente de la Federación de Rusia de alta traición o comisión de otra infracción grave.

La demanda se interpone ante la Corte Constitucional quien la admite, la sobresee o la rechaza, debiendo fundar y motivar sus resoluciones mediante el voto de una mayoría simple.³ Existen algunas excepciones, verbi gratia para la votación de una resolución relativa a la interpretación de la Constitución se requiere una mayoría calificada de los dos tercios del número total de los juzgadores.

199. La Corte Suprema de Justicia de la Federación de Rusia. La Corte Suprema de Justicia de la Federación de Rusia es la Corte superior de todas las jurisdicciones federales. De acuerdo a la Constitución (artículo 126), es “el órgano judicial superior para los asuntos civiles, penales, administrativos y otros asuntos que competen a los tribunales de derecho común; ejerce la vigilancia judicial de sus actividades en la observancia de las formas procesales dispuestas por la

² Véase P. Gelard, L'actualité constitutionnelle en Russie, en *Revue de droit constitutionnel* de los años 1992 a 2001.

³ Los jueces pueden emitir opiniones disidentes.

ley federal y emite instrucciones sobre las prácticas judiciales”. Como una reminiscencia del antiguo régimen soviético, la Constitución le reconoció la facultad de presentar iniciativas de leyes.

La Corte Suprema es usualmente una jurisdicción de apelación pero tiene igualmente competencia, aun cuando limitada, de primera instancia. La Suprema Corte puede en consecuencia ser jurisdicción de primera instancia, jurisdicción de apelación y también jurisdicción de casación.

Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Consejo de la Federación a propuesta del presidente de la Federación de Rusia, quien habrá recibido la opinión del presidente de la Corte Suprema, luego de un examen por un “colegio de calificación”. La Corte Suprema resuelve en forma colegiada, integrada según el caso por un magistrado y dos asesores nombrados por un periodo de 5 años o por tres jueces.

Con el propósito de disminuir la influencia en los tribunales del Poder Ejecutivo, la ley de 1996 preconizó que paralelamente a la Corte Suprema de la Federación de Rusia se creara un Departamento judicial. La ley del 8 de enero de 1998 organizó este Departamento integrado por determinado número de administradores. Su mandato es permitir que todas las jurisdicciones inferiores ejerzan su actividad de manera independiente y eficiente.

200. Las jurisdicciones inferiores. Dentro del orden jerárquico de las jurisdicciones, bajo la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Federación de Rusia figuran las Cortes Supremas de las Repúblicas Federadas, de los territorios, de las regiones, de las ciudades de importancia federal, de las regiones y distritos autónomos. Estas jurisdicciones generalmente están divididas en una cámara o sala criminal y una cámara o sala civil y pueden ser jurisdicciones de apelación o de primera instancia. Todos los jueces federales son nombrados por el presidente de la Federación de Rusia. Esas Cortes resuelven usualmente en forma colegial compuesta de un juez y dos asesores o por tres jueces. Pero cuando actúan como jurisdicciones de primera instancia, pueden en ciertas ocasiones resolver con un juez unitario. Las jurisdicciones rusas admiten también la fórmula de los jurados (solamente identificados en nueve de los “sujetos” de la Federación) limitados a juicios en materia penal y en infracciones graves. La institución de los jurados fue introducida en forma experimental ya que es totalmente ajena a la tradición rusa y es incompatible con la tradición inquisitorial tan arraigada en la URSS. La fórmula de jurados requiere adicionalmente de importantes financiamientos. Es difícil prever sobre el futuro de esta institución en el procedimiento ruso.

En el primer nivel, como jurisdicciones de primera instancia, se encuentran los tribunales de distrito (así se red denominaron en 1996 los tribunales populares de la URSS) compuestos de jueces que resuelven en la mayoría de los casos con la presencia de asesores del pueblo.

Entre los objetivos de las reformas figuraba la creación de tribunales de paz, lo que constituía una forma de regreso a la tradición zarista. El incremento constante de juicios, tanto en materia civil como criminal, parecía recomendar la creación de una nueva jurisdicción de primera instancia, que sería competente para juzgar en todos los ámbitos, sea civil, penal o administrativo, los asuntos de menor cuantía. La ley de 1996 previó la creación de los tribunales de paz; se carece sin embargo de una ley específica que organice esta nueva jurisdicción. Las dificultades generadas por la creación de esta jurisdicción son más que evidentes; habría que nombrar más de diez mil juzgadores de paz en todo el territorio de la Federación de Rusia. Es obvio que esta designación no puede hacerse sino con el transcurso del tiempo. Las cortes de distritos se convertirían entonces en tribunales de apelación de las resoluciones pronunciadas por los tribunales de paz y ello exigiría por lo tanto una reorganización en la competencia de estos

tribunales. En el ínterin empero, un proyecto de ley concerniente a los tribunales de paz fue aprobado en 1997 por la Duma.

201. Las cortes de arbitraje. En el derecho socialista en que predominaba la economía, era esperable que unas jurisdicciones específicas, los paneles de arbitraje, conocieran de asuntos en materia comercial o económica y que los resolvieran de acuerdo a un procedimiento singular.⁴ El antiguo régimen soviético había instituido por consiguiente un sistema específico de arbitraje público cuya competencia era resolver las controversias que surgiesen entre las empresas públicas o los diferentes ministerios gubernamentales. Los organismos de arbitraje eran diferentes de las jurisdicciones ordinarias; desempeñaban una función intermedia entre un órgano de conciliación y un tribunal de plena jurisdicción. Se podía recurrir a un panel de arbitraje únicamente en caso de no haber logrado ninguna conciliación y este panel debía intentar encontrar una solución amistosa. No es sino después del fracaso de todo intento de conciliación que se accedía a un procedimiento cuasi judicial.

El arbitraje de Estado que proviene de una ley de 1918, fue reformado en numerosas ocasiones. Durante la Perestroika una ley reorganizó esas cortes de arbitraje y creó la Corte Superior de Arbitraje de la URSS. La Constitución de 1993 previó expresamente la Corte Superior de Arbitraje; como: “el órgano judicial superior para el juicio de los litigios económicos y de los otros casos examinados por las cortes de arbitraje”. Su mandato es “ejercer la vigilancia judicial de su actividad de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley federal y adoptar instrucciones sobre las cuestiones de práctica judicial”. La ley del 5 de mayo de 1995 relativa a las Cortes de Arbitraje en la Federación de Rusia impulsó varias reformas pero conservó la orientación dada en 1991. Esta ley de 1995 fue acompañada de un Código de Procedimientos de las Cortes de Arbitraje, misma que fue modificada en el año 2002.

Entre las Cortes de Arbitraje, se encuentra en la cúspide la Suprema Corte de Arbitraje integrada por una asamblea, una presidencia y dos cámaras o salas, una para los casos “económicos” o comerciales y la otra para los litigios cuyo objeto sea de índole administrativa; en el nivel inferior existen diez cortes regionales (que únicamente resuelven de manera colegiada, como jurisdicción de apelación) y las cortes de arbitraje de los “sujetos” de la Federación (en 1988 había 88 cortes de arbitraje).

La reforma de 1995 pretendió en alguna forma transformar el arbitraje de Estado cuyo origen era el sistema socialista; estas reformas intentaron transformar las jurisdicciones destinadas a resolver litigios económicos dentro de una economía planificada, en tribunales de comercio facultados para resolver litigios económicos o comerciales en una economía de mercado. La reforma era radical, pero la tradición soviética aún persiste. Al crear tribunales económicos, la Federación de Rusia se aproxima a países como Francia o Alemania que tienen tribunales especializados para los litigios comerciales.⁵

A diferencia de los antiguos órganos de arbitraje de Estado que eran esencialmente tribunales administrativos, cuya competencia era resolver litigios entre empresas públicas, los tribunales “económicos” son actualmente competentes para pronunciarse en litigios comerciales que oponen

⁴ Véase *infra* nos. 161 et s.

⁵ K. Hendley, *Remaking an Institution: The Transition in Rusia from State Arbitrazh to Arbitral Court*, *The American Journal of Comparative Law*, vol. 46, 1, 1998, p. 93.

tanto a personas privadas como públicas. Es la materia litigiosa la que motiva su competencia, pero que se acota expresamente a los juicios de materia “económica” definidos en el Código de Procedimientos. Para que pueda sustanciarse un proceso en estos tribunales se requiere que las partes ya sean personas morales o personas físicas estén previamente registradas como comerciante, de otra forma el litigio únicamente se puede someter a las jurisdicciones de derecho común.

Las Cortes de Arbitraje en su totalidad son cortes federales y se encuentran sujetas a los nuevos principios insertos en la Constitución y la ley federal. Estas cortes son por la tanto independientes y tienen por vocación la protección de los ciudadanos. Los principios de contradicción, de igualdad, de independencia de los juzgadores y de igualdad de las partes ante la ley, se encuentran salvaguardados por el artículo 6 de la ley de 1995.

Aun cuando el mandato esencial de las cortes de arbitraje es resolver controversias en un país de economía de mercado, perduran algunos vestigios de la tradición soviética. La función del juzgador es eminentemente activa ya que está obligado a “fortalecer la legalidad y prevenir cualquier acto ilícito” (artículo 5 de la ley federal). El juzgador tiene por consiguiente un poder de control que resulta extraño tanto al principio de contradicción que debe asegurarles la igualdad a las partes, como a la naturaleza misma del litigio que es de índole comercial.⁶ La motivación que la Suprema Corte de Arbitraje pueda instruir a las Cortes de Arbitraje inferiores tiene su origen en la práctica tradicional de las antiguas Cortes de Arbitraje de Estado y de las jurisdicciones soviéticas en general.⁷

El Código de Procedimientos prevee que únicamente sólo cuatro personas están legitimadas para interponer un recurso en revisión ante el Presidium de la Suprema Corte de Arbitraje: el procurador general, el procurador general delegado, el presidente de la Suprema Corte de Arbitraje y su vicepresidente. El propósito de este recurso es someter a la Suprema Corte de Arbitraje resoluciones que provienen de las Cortes de Arbitraje inferiores a efecto de salvaguardar entre otros el respeto a los derechos de las partes; que no se haya cometido ningún error en la debida aplicación de la ley y que su aplicación sea uniforme. Las partes involucradas en el proceso arbitral no pueden consecuentemente recurrir en apelación a la Suprema Corte de arbitraje; sólo disponen de un recurso que lo pueden interponer en vía de apelación ante la Corte que falló en primera instancia o bien interponer un recurso de casación ante una de las diez Cortes de Arbitraje regionales creadas en 1995.

202. El arbitraje comercial privado. El arbitraje privado ya se conocía desde la época zarista y durante el periodo soviético. Se empleaba con frecuencia para resolver con mayor diligencia las controversias que surgían entre empresas públicas de Estado o entre una empresa soviética y una parte extranjera. En el orden jurídico soviético existían dos cortes permanentes de arbitraje: la Comisión de Arbitraje del Comercio Exterior y la Comisión de Arbitraje Marítima.

Con el advenimiento del nuevo régimen se sucedieron rápidamente la elaboración de textos relativos al arbitraje privado. En 1992 se adoptó una “ley temporal sobre la Corte de Arbitraje para la resolución de los litigios económicos” y en 1993, se votó una ley sobre el arbitraje

⁶ K. Halverson. Resolving Economic Disputes in Rusia’s Market Economy, *Michigan Journal of International Law*, vol. 1-8 n° 1, 1996, p. 59.

⁷ *Ibidem*. p. 72.

comercial internacional. Existe por lo tanto una diferencia entre el arbitraje privado interno y el arbitraje privado internacional.

El arbitraje privado interno no pertenece a la organización judicial rusa y en tanto tal tiene un ámbito limitado. Únicamente las controversias que se encuentren en el ámbito de competencia de las “cortes económicas” pueden ser objeto de este arbitraje y no deben abrigar un contenido administrativo. En consecuencia el arbitraje queda reservado para controversias en materia comercial que emerjan entre partes “registradas” como comerciantes. La repartición de competencias entre las cortes ordinarias y las cortes de arbitraje ha resultado sumamente complejo. Un nuevo Código de Procedimientos Penales se votó en 2002 (debió entrar en vigor el 1o. de enero del 2003) pero aun falta que se promulgue un Código de Procedimientos Cíviles. Los dos Códigos de Procedimientos Cíviles y Penales deberán de solucionar el ámbito de competencia entre las cortes ordinarias y las cortes de arbitraje, ya que la Federación de Rusia carece de un Tribunal de conflictos.

Una de las debilidades del arbitraje privado interno proviene del procedimiento que debe observarse. La corte económica de arbitraje de la cual depende el tribunal arbitral es la única que puede autorizar la ejecución de un laudo arbitral. La corte podrá rechazar la ejecución si considera que la composición del tribunal de arbitraje no respetó la voluntad de las partes tal como se expresa en la cláusula compromisoria; ¿es esta la única razón por la que los hombres de negocios rusos no utilicen frecuentemente el arbitraje privado interno?

La ley del 7 de julio de 1993 sobre el arbitraje comercial internacional autoriza diversas formas de arbitraje destinadas a resolver controversias comerciales que emergen entre una parte rusa y una parte extranjera: arbitraje ad hoc o arbitraje a cargo de un tribunal de arbitraje permanente.⁸ Los dos antiguos tribunales de arbitraje del periodo soviético sobrevivieron el tránsito de régimen: la Corte de Arbitraje del Comercio Internacional y la Comisión de Arbitraje Marítimo. Esas dos cortes arbitrales dependen de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia. Cada corte de arbitraje precisa su procedimiento, pero debe respetar algunas reglas que impone la ley de 1992 (número impar de árbitros, reglas relativas a la competencia). Por otra parte la ley de 1993 adoptó la ley modelo sobre el arbitraje del comercio internacional del UNCITRAL.

Sólo los laudos arbitrales provenientes de un país con el que se concluyó un tratado para el reconocimiento de las sentencias arbitrales pueden ejecutarse en territorio ruso. Esa regla que existía durante el régimen soviético se preservó y fue reproducida en la ley federal del 23 de octubre de 1996 sobre el sistema judicial de la Federación de Rusia.

203. El personal judicial. Los jueces no tenían muy buena reputación durante la era soviética. Las condiciones prevalecientes hacían propicia una justicia controvertida, para decir lo menos: en la elección de los jueces prevalecía más sus inclinaciones políticas que su capacidad jurídica; la afiliación al partido comunista era una condición necesaria así como su pertenencia a la nomenclatura. El estatuto orgánico de los jueces fue reconsiderado recién experimentado el cambio de régimen y se promulgó un nuevo estatuto único para todos los jueces.

⁸ G. Babitchev, Le contrôle judiciaire des sentences internationales dans la Fédération de Russie, *Revue de l'arbitrage* 1, 2002, pp. 71-146 ; A. S. Komarov, International commercial arbitration in Russia as mean of resolving international economic disputes, *Rev. of central and East European Law*, 1996, vol. 22, 1, pp. 19-32.

El artículo 120 de la Constitución asegura la independencia de los juzgadores; "...únicamente están sometidos a la Constitución de la Federación de Rusia y a la ley federal...". Para poder garantizar su independencia, se abandonó el sistema de la elección de los jueces. En la actualidad los jueces después de su designación son inamovibles e inviolables. Adicionalmente "el financiamiento de los tribunales únicamente depende del presupuesto federal que debe garantizar la posibilidad de impartir justicia plenamente y de manera independiente, conforme a la ley federal" (artículo 124 de la Constitución). La independencia y la competencia de los juzgadores es una garantía de una buena administración de justicia; por lo que se buscó la competencia de los jueces. La Constitución precisa que "pueden ser nombrados jueces los ciudadanos de más de 25 años, que tengan una preparación jurídica superior y una antigüedad profesional no menor a cinco años en una profesión jurídica". A pesar del énfasis de estos textos legales, nada asegura que se apliquen. Parece ser que numerosos jueces, formados durante la era soviética, deben adaptarse a una economía de mercado, lo que no es nada sencillo y cómo lo sostiene un autor⁹ "...en realidad, el prestigio y el poder de los jueces han permanecido muy bajos".

En algunos tribunales, los jueces dictaminan con la asistencia de asesores populares procedentes de la época soviética. Son simples ciudadanos que asisten al juzgador para impartir justicia, aún cuando sólo sea en jurisdicciones inferiores.

Todas las reformas relativas a la organización judicial rusa se enfrentan actualmente tanto a la dificultad de nombrar el número necesario de jueces capaces, como a la carencia de recursos financieros. Desde 2001 la Duma tiene ante sí una docena de proyectos de leyes que aspiran a generar cambios en el estatuto orgánico de los juzgadores. En esa forma los presidentes de los tribunales ya no serían inamovibles; serían nombrados por un periodo de seis años renovable por una ocasión. La edad máxima de los juzgadores se fijaría a 65 años (70 años para los magistrados de la Corte constitucional). La nominación de los jueces se haría a propuesta de un colegio que ponderaría su probidad y capacidad.

204. La Prokuratura. La Prokuratura es una antigua institución rusa que permitía que los agentes del poder central vigilar la administración local. Esta institución fue reorganizada en 1936. La Prokuratura desempeñaba la función de un ministerio público en las diferentes jurisdicciones; actuaba simultáneamente como vigilante de la legalidad y de la administración (ver supra no. 142). Constituía una organización totalmente autónoma, bajo la dependencia directa del Soviet Supremo de la URSS que designaba el Procurador General. Antes del cambio de régimen la Prokuratura estaba sujeta a la ley de 1979.

Actualmente la ley del 17 de enero de 1992, modificada en 1995, es la que rige esta institución; continúa siendo un sistema centralizado que depende ahora directamente de la Federación de Rusia (artículo 71 de la Constitución). Existen procuradores en cada orden de gobierno: Procurador General de la Federación de Rusia, de las Repúblicas, de los territorios, de las regiones, de las ciudades de importancia federal, de las regiones autónomas y de los distritos autónomos.

Es el Consejo de la Federación quien, a recomendación del presidente de Rusia, designa al Procurador General de la Federación. La duración del periodo de todos los procuradores es de cinco años. Cualquier ciudadano de la Federación de Rusia que satisface determinadas

⁹ M. Paleev, *The Establishment of an Independent Judiciary in Russia*, 1 Parker Sch. J.E. p. 647, 1994.

condiciones de edad y posee un alto nivel de conocimiento jurídico puede aspirar a ser nombrado procurador.

La ley de 1995 mantuvo la doble función de la Prokuratura. De tal suerte que ésta conserva las atribuciones de vigilancia general que le eran conferidas a la Prokuratura antes de 1991. Continúa teniendo facultades de vigilancia de la legalidad. En esa forma supervisa que los actos que provienen de los ministerios, de los órganos federales o de los sujetos de la Federación respeten efectivamente la Constitución y las leyes; en esa forma ejerce un control sobre los actos administrativos. Se puede recurrir a la Prokuratura por la vía de una demanda o mediante la formulación de una petición emanada de los interesados respecto de cualquier caso en que se hubiera transgredido la misma ley. El procurador puede igualmente iniciar un proceso o formular una protesta al órgano que emitió un texto contrario a la ley informando de ello al presidente de la Federación de Rusia. Los procuradores deben además velar por el respeto de los derechos del hombre y del ciudadano.

La Prokuratura actúa también como ministerio público. Está a cargo de la persecución de las infracciones en materia criminal. Mucho se discutió sobre la conveniencia de restringir sus poderes en beneficio de los tribunales, incrementando su función en las instrucciones sumarias y otorgándoles más poder a los jueces en la decisión de la detención preventiva. Pero aun cuando los tribunales reciben una gran cantidad de quejas, los ciudadanos rusos continúan acudiendo a la Prokuratura cuya intervención se estima cómo más rápida y menos onerosa.

Cuando un ciudadano corre el riesgo de ver restringida su libertad ya sea por encarcelamiento o por su internación en un hospital, la Prokuratura fiscaliza que se respeten todas las disposiciones legales protectoras de los ciudadanos.

Las atribuciones importantes de la Prokuratura no tuvieron cambios significativos. Su mandato esencial consiste en proteger el ciudadano ruso contra los excesos o desvíos de la administración y luchar eficientemente contra la criminalidad.